

CAPITULO II

EL DERECHO LEGISLADO

SECCION II

INTERPRETACION DE LA LEY

151. La actitud tradicional	394
152. La actitud "moderna"	398
153. Principales huellas de la actitud tradicional	404
154. Utilización de los trabajos preparatorios	408
155. Importancia actual del <i>common law</i> como marco de la ley	414

INTERPRETACION DE LA LEY

151. La actitud tradicional.
152. La actitud "moderna".
153. Principales huellas de la actitud tradicional.
154. Utilización de los trabajos preparatorios.
155. Importancia actual del *common law* como marco de la ley.

151.—Ni que decir tiene que es difícil definir la actitud de los tribunales de los Estados Unidos respecto a la interpretación de las leyes.¹ Una obra clásica sobre la cuestión, en tres volúmenes, está lejos de agotar el tema.² No vamos a estudiar pues las múltiples re-

151.—

1. Sobre el régimen de las decisiones que interpretan las leyes, v. *supra*, N° 109, texto y notas 15 y 17. Respecto a la aplicación en el tiempo de los cambios de jurisprudencia, en lo concerniente a la interpretación de las leyes, v. *supra*, N° 133.

2. SUTHERLAND, *op. cit. supra*, N° 145, nota 1. V. igualmente READ and MACDONALD, COHEN, HORACK y LANDIS, citados en la misma nota; F. J. MCCAFREY, *Statutory Construction* (1953); *A Symposium on Statutory Construction*, "Vand. L. R." (1950), vol. 3, pp. 365-596; FRIEDMANN, pp. 309-320, 373-374, así como *Statute Law and Its Interpretation in the Modern State*, "Can. B. R." (1948), vol. 26, pp. 1277-1300; GRAY, pp. 170-187; FRANK, pp. 292-309; Helen, SILVING, *A Plea for a Law of Interpretation*, "Un. Pa. L. R." (1950), vol. 98, pp. 499-529; Frank E. HORACK, Jr. *The Desintegration of Statutory Construction*, "Ind. L. J." (1949), vol. 24, pp. 335-352; Félix FRANKFURTER, *Some Reflections on the Reading of Statutes*, "Col. L. R." (1947), vol. 47, pp. 527-546; Archibald, COX, *Judge Learned Hand and the Interpretation of Statutes*, "Harv. L. R." (1947), vol. 60, pp. 370-393; Jacobus ten BROEK, *Admissibility and Use by the United States Supreme Court of Extrinsic Aids in Constitutional Construction*, "Cal. L. R." (1938), vol. 26, pp. 287-308, y *Use by the United States Supreme Court of Extrinsic Aids in Constitutional Construction*, "Cal. L. R." (1938), vol. 26, pp. 437-454, 664-681 y "Cal. L. R." (1939), vol. 27, pp. 157-181 y 399-421; Frank E. HORACK, Jr., *The Common Law of Legislation*, "Iowa L. R." (1937), vol. 23, pp. 41 y ss.; *Legislative Materials to Aid Statutory Interpretation*, nota en "Harv. L. R." (1937), vol. 50, pp. 822-826; STONE, *The Common Law*, pp. 4-26, principalmente, pp. 11-16 ó 120-163, 128-135; S. E. THORNE, *The Equity of a Statute and Heydon's Case*, "Ill. L. R." (1936), vol. 31, pp. 202-217; Frederick J. de SLOOVERE, *Equity and Reason of a Statute*, "Corn. L. Q." (1936), vol. 21, pp. 591-613; James LANDIS, *A Note on Statutory Interpretation*, "Harv. L. R." (1930), vol. 43, pp. 886-896; Max RADIN, *Statutory Interpretation*, "Harv.

glas que circulan en este dominio, sino que vamos a presentar solamente los puntos de vista generales que se deducen de su estudio.

Una idea fundamental se impone: la de que la actitud de los tribunales es variable, yendo desde la actitud inglesa clásica hasta la actitud continental; pero que ha evolucionado y que la actitud clásica está hoy casi completamente rechazada en su forma radical, mientras que la actitud continental ha ganado terreno hasta casi adquirir carta de ciudadanía.³

La actitud inglesa clásica, si es posible resumirla en una frase, consiste en dar a las leyes, en principio, una interpretación literal

L. R." (1930), vol. 43, pp. 863-885; Karl LLEWELLYN, *The Bramble Bush* (1930), pp. 73-78; Ernst FREUND, *Interpretation of Statutes*, "Un. Penna. L. R." (1917), vol. 65, pp. 207-231; Roscoe POUND, *Courts and Legislation*, así como *Common Law and Legislation, Sources*, pp. 108-114, y *The Formative Era*, pp. 38-80, principalmente, 47, 48, 60-61, 67-70; Ernst BRUNCKEN, *Interpretation of the Written Law*, "Yale L. J." (1915), vol. 25, pp. 129 y ss.; W. H. LOYD, *The Equity of a Statute*, "Un. Penna. L. R." (1909), vol. 58, pp. 76 y ss. V. también la bibliografía proporcionada por Paul H. SANDERS y JOHN W. WADE, *Legal Writings on Statutory Construction*, "Vand. L. R." (1950), vol. 3, pp. 569-584, y desde un punto de vista procesal, Frederick F. de SLOOVERE, *Judges and Jury in Statutory Interpretation*, "Harv. L. R." (1953), vol. 46, pp. 1086-1110. En español, v. André TUNC, *La interpretación de las leyes en los Estados Unidos*, "Cuadernos de Derecho Angloamericano", 1954, N° 2, pp. 74-90.

Se cita, por otra parte, el desprecio de Cardozo —y, con él, de un buen número de los mejores juristas del *common law*—, por las cuestiones de interpretación de las leyes "which no man can make interesting" (referido por Robert H. JACKSON, *Full Faith and Credit*, "Col. L. R." (1945), vol. 45, pp. 1-34, 1). Cf. CARDOZO, *The Nature*, pp. 18-21.

Respecto al valor de las diferentes partes de la ley para la interpretación de una disposición legal, v. SUTHERLAND, t. 2, *op. cit.*, § 4801-4837, pp. 341-381.

3. Cf. FRIEDMANN, *loc. cit.* Condenados a no presentar aquí más que desarrollos generales, hemos de renunciar a tratar separadamente acerca de la interpretación de las diversas formas del derecho legislado o de la actitud de los diferentes tribunales.

La actitud de cada uno de los tribunales es susceptible de variar mucho respecto a cada una de las formas del derecho. En conjunto, sin embargo, se puede decir que los tribunales federales, que interpretan esencialmente las leyes federales, lo hacen de una manera más liberal que los tribunales de Estado, que normalmente interpretan las leyes estatales.

Es la Constitución federal la que realmente goza de una interpretación más liberal. La necesidad de darle tal interpretación ha sido afirmada por la Suprema Corte desde el principio: v. principalmente, *United States vs. Deveaux* (1809), 5 Cr. 61, 87, 3 L. ed. 38, *Martin vs. Hunter's Lessee* (1816), 1 Wh. 304, 4, L. ed. 97, *McCulloch vs. Maryland* (1819), 4 Wh. 316, 4 L. ed. 579, citadas en *Le syst. const.*, t. 1, N° 39, nota 13. Lo mismo se afirma en la actualidad: v. sobre todo, *Youngstown Sheet and Tube Co. vs. Sawyer* (1952), 343 U. S. 579, y André TUNC, *Les pouvoirs du Président des Etats-Unis et l'arrêt de la Cour Suprême relatif à la saisie des aciéries*, "Rev. int. dr. comp." 1952, pp. 735-751, V.

Los tratados deben ser interpretados de tal forma que no deroguen el derecho de los Estados más que en la medida necesaria para la realización de una política nacional: v. *United States vs. Pink* (1942), 315 U. S. 203, 86 L. ed. 796, 62 S. Ct. 552.

y restrictiva,⁴ sin negar completamente que debe hacerse cierto lugar, en algunos casos, a la intención del legislador, aunque se aparte de la letra del texto que se aplique.

La interpretación literal de las leyes no tiene probablemente otro origen que una cierta forma del espíritu de chicana, que, al parecer, se conserva mejor entre los juristas anglosajones que entre los juristas continentales.⁵ Lo mismo que el litigante romano hacía rechazar la demanda de su adversario que había alegado el corte de sus "viñas" y no el de sus "árboles", conforme a la redacción de la acción, tampoco el litigante inglés tenía ninguna dificultad en sostener que una ley o un contrato redactados con un "he" era inaplicable a una persona del sexo femenino, y creía que contaba para ello con la fuerza de la evidencia. Hoy, por supuesto, tal medio de defensa sería rechazado si el juez no ve razón para que la ley no se aplique a las mujeres igual que a los hombres. Sin embargo, la reacción contra este "espíritu de chicana" no ha sido la reacción sana que hubiera consistido en dictar soluciones de buen sentido; ha sido la respuesta al "espíritu de chicana" por un espíritu de igual precisión, reconociendo, en cierta forma, el fundamento de aquél. Los juristas han adoptado la costumbre de precisar en las leyes o en los contratos, que la palabra *person* designará tanto a una persona del sexo masculino como a una del sexo femenino, o incluso una persona moral, ya sea asociación, sociedad de personas o sociedad de capitales. Todavía hoy, ésta u otras disposiciones

4. Cf. DAVID, *Introduction*, pp. 99-118; Theodore F. T. PLUCKNETT, *L'interprétation des lois en Angleterre, Introduction*, § 36, t. 1, pp. 434-449; MAXWELL, *Interpretation of Statutes* (10th ed. 1953); ALLEN, pp. 458-479, 479-504; FRIEDMANN, *op. et loc. cit. supra*, N° 151 nota 2, así como *Law and Social Change in Contemporary Britain* (1951), pp. 237-265, y *The Interpretation of Statutes in Modern British Law*, "Vand. L. R." (1950), vol. 3, pp. 544-556; GUTTERIDGE, pp. 101-116, o trad. francesa, pp. 135-152 (trad. española, pp. 141-158); John WILLIS, *Statute Interpretation in a Nutshell*, "Can. B. R." (1938), vol. 16, pp. 1-27. Cf. igualmente, Glanville L. WILLIAMS, *Language and the Law*, "L. Q. R." (1945), vol. 61, pp. 71-86, 179-195, 293-303, 384-406, "L. Q. R." (1946), vol. 62, pp. 387-406.

Conviene precisar bien, además, que las reservas aportadas desde hace siglos al principio de interpretación literal y restrictiva no han cesado de adquirir importancia. V. sobre el particular, principalmente, ALLEN, *op. cit. et loc. cit.*; FRIEDMANN, *op. et loc. cit.*; y consúltense las diversas decisiones comentadas en "L. Q. R." (1951), vol. 67, 7-10, 10-12, 13-14, 14-15, y en "L. Q. R." (1953), vol. 69, p. 162 (Jones vs. Evans [1944], K. B. 582) y p. 440.

Hay que hacer notar que, si bien las dos reglas, de interpretación literal e interpretación restrictiva, se complementan normalmente, pueden también entrar en conflicto. En la sentencia *United States vs. Five Gambling Devices* (1953), 346, U. S. 441, fue rechazando la aplicación literal del texto cómo una parte de la Suprema Corte pudo dar una interpretación estricta que la hacía válida (cf. André TUNC, *Le contrôle de la constitutionnalité des lois aux Etats-Unis*, "J. des. trib.", 1954, p. 325 y ss., N° 11).

5. Se encontrará una prueba en *Otter vs. Church Adams, Tatham and Co.* [1953], 1 W. L. R. 156 (cf. "L. Q. R." (1954), vol. 69, pp. 160-161).

de ese género subsisten en las leyes y en los contratos, aunque se hayan hecho inútiles.⁶

La interpretación restrictiva procede de la idea, muy diferente, según la cual el *common law* forma el fondo del derecho. Toda disposición legislativa que no sea su expresión, constituye, en consecuencia, con relación a él, una derogación, una excepción que, como toda excepción, debe ser interpretada restrictivamente. "Siguiendo el punto de vista ortodoxo de nuestro derecho, escribe el Decano Roscoe Pound, una ley es una cosa excepcional, algo introducido en el cuerpo general del *common law* sin ninguna relación de necesidad o de sistema, a fin de remediar una situación especial y, por lo tanto, gobernando sólo esa situación. Para nosotros, una ley, a no ser que declare el *common law*, no da más que una regla. También las leyes que derogan el *common law* deben ser interpretadas restrictivamente".⁷ "Por el contrario, prosigue, en el sistema de derecho continental, una ley se considera como la expresión de un principio que se inserta en el cuerpo del derecho, con los demás preceptos jurídicos que también expresan principios. De ahí, la posibilidad para los juristas de razonar por analogía partiendo de una disposición legal... Es pues tan fácil para ellos hacer justicia con la ayuda de un código, como difícil —estaba tentado de decir casi imposible— es para nosotros. Para ellos, una serie de artículos del código corresponde a lo que es para nosotros una serie de decisiones. Ellos no comprenden cómo podemos nosotros considerar a éstas como aportándonos un conjunto de reglas jurídicas. Nosotros no comprendemos cómo ellos pueden hacer justicia por medio de aquéllas, en la multitud de casos que no caen entre las cuatro esquinas del texto."⁸ El jurista francés, según la exacta expresión de Planiol, ve en el juez "al legislador de los casos particulares"; para el jurista inglés, y, en gran parte, para el jurista de la antigua Francia, es el Parlamento el que asume esa función.

6. V. por ejemplo, *supra*, N° 147, nota 6. Otro ejemplo asombroso de esta actitud es proporcionado por la reglamentación fijada en el parque de Yellowstone prohibiendo a los automóviles circular en "punto muerto", "si no es con vistas y en el curso de un cambio de velocidad". Los accidentes causados por automovilistas que, para aproximarse silenciosamente a los animales salvajes, avanzaban en "punto muerto", han debido ser la causa de prohibir la circulación en esa forma, pero se estimó necesario precisar que quien cambiando de velocidad pasase por "punto muerto", no contravenía el reglamento.

7. Roscoe POUND, *The Theory*, p. 647. V. también, del mismo autor, *The Formative Era*, principalmente, pp. 47-60, 61, 70, o *La Législation*, sobre todo; p. 408, y *Common Law and Legislation*; STONE, *The Common Law*, pp. 72-73, 75.

8. *Op. et. loc. cit.* STONE, *The Common Law*, p. 13, recuerda, sin embargo, que algunas leyes antiguas de Inglaterra, tales como el *Statute of Frauds* y el *Statute of Limitations*, han servido de punto de partida para razonamientos por analogía, es decir, que han sido adaptados a casos no previstos y a nuevas condiciones, de acuerdo con su espíritu. En particular se remite al artículo de LANDIS, *Statutes and the Sources of Law*, cit. *supra*, nota 2, que aporta numerosos ejemplos en los que esta doctrina de la "equity of the statute", ha sido aplicada.

En los Estados Unidos, parece poco dudoso que la interpretación restrictiva de las leyes ha tenido una segunda fuente: la hostilidad política hacia la ley, instrumento de reglamentación contrario a los principios del "laissez-faire".⁹

Esta hostilidad se ha manifestado respecto a leyes diferentes de las que acaban de ser consideradas: leyes que normalmente no tenían más que una relación lejana con el *common law*, por tratarse de leyes sociales o económicas. Carecía pues, tal hostilidad, de todo fundamento técnico, pero no ha sido menos violenta, antes al contrario, y ha adoptado las más diversas formas: la utilización de los conceptos de libertad o de propiedad en condiciones tales como, por ejemplo, que la reglamentación de la duración máxima de horas de trabajo fuera un atentado contra la libertad;¹⁰ pero también, entre otras, la interpretación restrictiva de las leyes. Es a esta interpretación restrictiva, por ejemplo, a la que se han sometido durante largos años las leyes *anti-trusts*, así como las que crearon la *Interstate Commerce Commission* y la *Federal Trade Commission* y definido sus facultades.¹¹

Finalmente, debemos mencionar quizá como un tercer factor que ha contribuido a la interpretación restrictiva de las leyes, aunque sea cercano al primero de los factores indicados, el conservadurismo habitual de los juristas y el de los anglosajones, así como el apego al *common law*. Estos tres factores hicieron, evidentemente, considerar toda ley como una innovación peligrosa y, además, sospechosa, que debe presumirse tiende a derogar, así sea lo menos posible, las reglas de la razón escrita, fruto de una experiencia insustituible, que son las reglas del *common law*.

152.—La actitud "moderna" respecto a las leyes es familiar al jurista europeo y, en particular, al jurista francés.¹

9. Cf. POUND, *op. et. loc. cit.*; *Le syst. const.*, t. 1, Núms. 82 y ss., 90, 91, 92, 100, 105, 116, 117, 121. Consúltese igualmente *supra*, N° 69.

10. Cf. *Lochner vs. New York* (1905), 198 U. S. 45, 49, L. ed. 937, 25 S. Ct. 539, estudiado en *Le syst. const.*, t. 1, N° 100, v. también Edouard LAMBERT, *Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux Etats-Unis*, 1921, pp. 130-176.

11. Cf. *Le syst. const.*, t. 1, Núms. 90, 91, 116. Se encuentra también otro testimonio de la hostilidad de los tribunales hacia la legislación y de la dificultad que tiene el legislador para hacerse obedecer, en el art. 1° de la Ley Norris-La Guardia de 1932 (cf. *Le syst. const.*, t. 1, N° 127): "*Be it enacted, that no court of the United States, as herein defined, shall have jurisdiction to issue any restraining order or temporary or permanent injunction in a case involving or growing out of a labor dispute, except in a strict conformity with the provisions of this Act; nor shall any such restraining order or temporary or permanent injunction be issued contrary to the public declared in this Act.*"

152.—

1. Cf. Jean BOULANGER, *La méthode depuis le Code de 1084 au point de vue de l'interprétation judiciaire*, informe a la "Semaine Internationale de Droit", 1950,

Consiste ella en mirar a la ley sin prevención y, sobre todo, sin prejuicio en su contra, es decir, en asegurarle una *fair interpretation*. En hacerle producir, en consecuencia, los efectos que un jurista razonable puede atribuir a su texto y, al mismo tiempo, en tanto que sea posible, los que desearía el legislador, principalmente concediendo una importancia primordial a su razón de ser.^{1 bis} En considerar, en fin, que las soluciones que da se relacionan con otras soluciones legislativas para formar principios más o menos generales, susceptibles de ser aplicados a una situación que no ha sido expresamente prevista por ella.

Calificar esta actitud continental de “moderna”, por oposición a la “clásica” actitud inglesa o norteamericana, no parece ser un punto de vista unilateral de las cosas. Los mejores y más grandes juristas norteamericanos han criticado la actitud tradicional y muchos han reconocido a los juristas continentales una gran facilidad en materia legislativa.² Por otra parte, y sobre todo, es un hecho cierto que el derecho norteamericano ha evolucionado desde la actitud tradicional hacia la actitud calificada de “moderna”. La dificultad estriba en seguir esa evolución y puntualizarla en la actualidad,³ dado que, conviene repetirlo, la actitud actual de los tribunales puede seguir en cierta medida inspirada por la actitud clásica,⁴ pero aproximarse normalmente mucho a la actitud continental.⁵

“Rev. int. dr. comp.”, 1950, pp. 746-757. V. igualmente R. WARLOMONT, *L'interprétation terminologique dans la doctrine et la jurisprudence*, “Journal des Tribunaux” (belga) 1951, pp. 177-180; Mitchell FRANKLIN, *A. Study of Interpretation in the Civil Law*, “Vand. L. R.” (1950), vol. 3, pp. 557-568.

1 bis. Cf. Código civil de Luisiana, art. 18: “El medio más universal y más eficaz para descubrir el verdadero sentido de una ley, cuando las expresiones son dudosas, es el de considerar la razón y el espíritu de esta ley o la causa que ha determinado a la Legislatura a dictarla” (en inglés en la versión de 1870).

2. V. algunos autores citados *supra*, N° 151, notas 2 y 4, principalmente POUND, STONE, LANDIS, FRIEDMANN, *Adde*: MORROW, pp. 537-556; AMOS and WALTON, *Introduction to French Law* (1935), pp. 6, 11-12; Manuel RODRÍGUEZ RAMOS, *Interaction of Civil Law and Anglo-American in the Legal Method in Puerto Rico*, “Tul. L. R.” (1948), vol. 23, pp. 1-37, 345-367, 347-351.

3. Quizá sea preciso subrayar de nuevo el carácter particularmente relativo y fragmentario de las consideraciones que siguen y de las citas que haremos. Millares de sentencias se dictan todos los años, que no sólo interpretan las leyes, sino que establecen reglas de interpretación o adoptan una actitud que es interesante estudiar. Los tres volúmenes de SUTHERLAND, repitámoslo, están lejos de agotar la materia.

4. Cf. *infra*, 153.

Esta actitud restrictiva se observa mejor en las leyes relativas al “derecho de los juristas”, es decir, a las materias de *common law*, que en las leyes políticas, sociales o económicas, casi independientes de él; en otros términos, es consecuencia de la actuación de los tribunales estatales mucho más que de los tribunales federales (cf. *supra*, N° 151, nota 3).

5. V. por ejemplo, *United States vs. Bramblett* (1955), 348, U. S. 503; *United States vs. Koppers Co.* (1955), 348 U. S. 254; *Youngstown Sheet and*

Tube Co. et al. vs. Sawyer (1952), 343 U. S. 579, estudiada en André TUNC, *Les pouvoirs du Président des Etats-Unis et l'arrêt de la Cour Suprême relatif à la saisie des aciéries*, "Rev. int. dr. comp." 1952, pp. 735-751, principalmente p. 749; United States vs. Hayman (1952), 342 U. S. 205; Markham vs. Cabell (1945), 326 U. S. 404, 90 L. ed. 165, 66 S. Ct. 193; S. E. C. vs. C. M. Joiner Leasing Corp. (1943), 302 U. S. 344, 88 L. ed. 88, 64 S. Ct. 120; United States vs. N. E. Rosenblum Truck Lines (1942), 315 U. S. 50, 53, 86 L. ed. 671, 62 S. Ct. 445; Phelps Dodge Corp. vs. N. L. R. B. (1941), 313 U. S. 177, 85 L. ed. 1271, 61 S. Ct. 845, 133 ALR 1217; United States vs. American Trucking Ass. (1940), 310 U. S. 534, 542-544, 84 L. ed. 1345, 60 S. Ct. 1059; Nardone vs. United States (1939), 308 U. S. 338, 84 L. ed. 307, 60 S. Ct. 266; Helverig vs. Davis (1937), 301 U. S. 619, 81 L. ed. 1307, 57 S. Ct. 904, 109 ALR 1319; Roschen vs. Ward (1929), 279 U. S. 337, 339, 73 L. ed. 722, 49 S. Ct. 336; International Stevedoring Co. vs. Haverly (1926), 272, U. S. 50, 52, 71 L. ed. 157, 47 S. Ct. 19; United Mine Workers vs. Coronado Coal Co. (1922), 259 U. S. 344, 60 L. ed. 975, 42 S. Ct. 570; United States vs. Johnson (1911), 221 U. S. 488, 496, 55 L. ed. 823, 31 S. Ct. 627; Johnson vs. Southern Pac. Co. (1904), 196 U. S. 1, 49 L. ed. 363, 25 S. Ct. 158; Bannet vs. United States (2nd Cir. 1949), 177 F. (2d) 806 (disposición previendo un pago a una persona si ella está viva, interpretada como requiriendo el pago a su sucesión después de su muerte, si ella estaba viva al vencimiento); Elizabeth Arden Sales Corp. vs. Gus Blass Co. (8th Cir. 1945), 150 F. (2d) 988, 161 ALR 370 (particularmente explícita); Small vs. United States (D. C. Cir. 1940), 110 F. (2d) 122, 127 ALR 814; Bishop vs. Hanna (1951), 218 S. Ct. 474, 63 S. E. (2d) 308, 24 ALR (2d) 808 (aplicación de una ley penal a actividades nuevas); Commonwealth vs. Blodin (1949), 324 Mass. 564, 87 NE (2d) 455; Duhame vs. State Tax Commission (1947), 65 Ariz. 268, 179 P. (2d) 252, 171 ALR 684; Christensen vs. Hennepin Transp. Co. (1943), 215 Minn. 10 NW (2d) 406, 147 ALR 945; State vs. Berry (1939), 200 Wash. 495, 93 P. (2d) 782 (interpretación extensiva de una ley penal); Teder vs. Rothermel (1939), 204 Minn. 570, 286 NW 353 (particularmente explícita); Kemmerer vs. State Farm M. A. I. Co. (1937), 201 Minn. 239, 276 NW 228, 114 ALR 173; State ex rel. Nagle vs. Sullivan (1935), 98 Mont. 425, 40 P. (2d) 995, 99 ALR 321; State ex rel. St. Paul vs. Minneapolis, St. Paul and S. S. M. R. Co. (1933), 190, Minn. 162, 251 NW 275; Bramall vs. La Rose (1933), 105 Vt. 345, 165 Atl. 916; Commonwealth vs. Welosky (1931), 276 Mass. 398, 177 NE 656 (restricción no escrita en la ley, pero conforme con la razón de ser y la intención del legislador); Kearney vs. Vann (1911), 154 N. C. 311, 70 SE 747. V. también las sentencias citadas por FRIEDMANN, pp. 315-318.

La interpretación literal es rechazada con particular vigor por algunas sentencias que afirman la necesidad de hacer prevalecer el espíritu de la ley sobre la letra. V. principalmente *Holy Trinity Church vs. United States* (1892), 143 U. S. 457, 36 L. ed. 266, 12 S. Ct. 511 y las sentencias citadas; *Bell vs. Mayor of New York* (1887), 105 N. Y. 139, 11 NE 495; *Dyer vs. Dyer* (1937), 212 N. C. 620, 194 SE 278.

De todas maneras es hoy una máxima corriente, afirmada por la mayor parte de las sentencias citadas *supra*, que el deber fundamental de los tribunales es el de hacer prevalecer la intención del legislador, lo que, a la vez, condena la interpretación literal y la interpretación restrictiva. V. ya la afirmación en *Minor vs. Mechanics. Bank* (1828), 1 Pet. 46, 64, 7 L. ed. 47, bajo la pluma de Story, y en numerosas sentencias antiguas mencionadas en *United States vs. American Trucking Ass.* (1940), citada *supra*. Aún sin establecer principios, las sentencias tratan de buscar constantemente la intención del legislador: v. tomada al azar, *Toolson vs. New York Yankees, Inc.* (1953), 346 U. S. 356, o *Wilko vs. Swan* (1953), 346 U. S. 427.

Puede suponerse que, desde el principio, los tribunales norteamericanos tuvieron, respecto de la ley, una actitud más "abierto", más "benevolente" que las jurisdicciones inglesas. El movimiento de codificación que, desde Massachusetts, se extendió progresivamente a todas las Colonias en el siglo XVII,⁶ supone, en efecto, que la ley goza del favor popular y, además, habitúa a los jueces a resolver de acuerdo con el derecho legislado. El *common law* reasume, ciertamente, su importancia en el siglo XVIII;⁷ pero en 1787 se promulga la suprema ley del país: la Constitución federal. La más alta fuente de derecho en la jerarquía de las fuentes, es pues un texto escrito, y un texto que se discute todos los días, no sólo en el pretorio, sino en la vida práctica. Ese texto tiene una significación propia; está infinitamente más separado del *common law* que todas las leyes o códigos anteriores y está concebido a veces, además, en términos muy generales, que dejan una amplia responsabilidad al intérprete.⁸ Por debajo de él, en fin, en la jerarquía de las fuentes, se desenvuelve un derecho federal igualmente legislado. Son estos otros tantos factores que habitúan al

V. igualmente utilizando los principios de una ley para colmar una laguna de su redacción, o aplicándolos a una situación no prevista por la ley fundándose en identidad de razón (es decir, aplicando la ley por analogía): Commercial National Bank of New Orleans vs. Canal-Louisiana Bank and Trust Co. (1916), 239 U. S. 520, 60 L. ed. 417, 36 S. Ct. 194; In re Debs (1895), 158 U. S. 564, 39 L. ed. 1092, 15 S. Ct. 900, estudiada en *Le Syst. const.*, t. 1, N° 91, texto y nota 14; Darmouth College vs. Woodward (1819), 4 Wh. 518, 4 L. ed. 629; Agar vs. Orda (1934), 264 N. Y. 248, 190 NE 479, 99 ALR 269; — requiriendo tal aplicación: la disposición citada *infra*, nota 13; — colmando, en cierta medida, una laguna de la Constitución: La Abra Mining Co. vs. United States (1899), 175 U. S. 423, 44 L. ed. 223, 20 S. Ct. 168; — utilizando una disposición constitucional bastante vaga para cambiar una regla de *common law*: Cooper vs. Seaverns (1909), 81 Kan. 267, 105 P. 509, 25 LRA (NS) 517, 135 Am. S. Rep. 359; — reconociendo el valor doctrinal de una ley inaplicable en el caso: The Propeller Genesee Chief vs. Fitzhugh (1851), 12 How. 443, 13 L. ed. 1058. Se ha citado (Philippe MALAURIE, *L'ordre public et le contrat*, t. 1, 1953, prefacio de Paul ESMEIN, p. 95, nota 5), una sentencia (McMullen vs. Shields (1934), 96 Mont. 191, 29 P. (2d) 652) que estimaba que un automóvil Ford era una "carreta" en el sentido de una ley aplicable a "dos caballos o mulas, sus arreos, una carreta y un trineo". Arthur L. GOODHART, *The New York Court of Appeals, Essays*, pp. 268-281, 280-281, observa, muy justamente, que una interpretación estricta de la ley propiamente dicha no puede convenir más que a un país conservador y a una sociedad estable. Un testimonio muy interesante de la diferente actitud, respecto a la ley, de los juristas ingleses y norteamericanos, nos lo proporciona la reseña de Cecil CARR sobre la obra de Arthur LENHOFF, *Comments, Cases and other Materials on Legislation* (1949), en "L. Q. R." (1953), vol. 69, pp. 553 y ss. Sobre la interpretación de las leyes en Canadá, v. Louis BAUDOUIN, *Le droit civil de la Province de Québec. Modèle vivant de droit comparé*, 1953, pp. 99-101, y *Méthode d'interprétation judiciaire du Code civil de Québec*, "Rev. du Barreau", 1950, pp. 397 y ss.

6. Cf. *infra*, N° 168.

7. Cf. *supra*, N° 71.

8. Cf. *Le syst. const.*, t. 1, N° 39, texto y nota 13.

juez a manejar el derecho legislado y a considerarlo en sí mismo, independientemente del *common law*, y que debían, en consecuencia, hacerle realizar rápidos progresos en el dominio de la técnica y de los principios convenientes, cuando su hostilidad política respecto a la legislación no buscaba argumentos en los principios tradicionales.

Aunque, sobre este punto, tengamos que atenernos en gran parte a impresiones y generalidades, podemos preguntarnos si los progresos de la actitud "moderna" no se hallan marcados por tres fechas: 1801, 1900 y 1937.

La fecha de 1801 es la que señala el acceso de John Marshall a la presidencia de la Suprema Corte. Sabida es la importancia política e histórica de esta presidencia.⁹ Lo que debe hacerse notar, desde el punto de vista de la interpretación de las leyes, no es sólo el que consideraciones políticas hayan inspirado a Marshall interpretaciones extensivas y flexibles de la Constitución, lo es todavía más, el que su inteligencia le haya permitido dictar decisiones de aspecto perfectamente "moderno", en las que la consideración del texto de una disposición se alía a la de su espíritu.¹⁰ Marshall, desgraciadamente, estaba demasiado adelantado para su época. Su técnica no influye sobre más tribunales que la Suprema Corte; y en la propia Suprema Corte no le sobrevive y no se la vuelve a encontrar durante largo tiempo en nadie más que en él y en Story.

La fecha de 1900 es más arbitraria. Parece, sin embargo, que sea a partir de fines del siglo XIX y principios del XX, principalmente bajo la influencia de Holmes, quien entra en la Suprema Corte en 1902, cuando se ve a una importante fracción de ésta modificar su actitud ante el número y la naturaleza de las leyes votadas después de la Guerra Civil, y admitir que la ley no es excepcional y que no deroga necesariamente al *common law*, puesto que puede tener un objeto totalmente ajeno a éste, y darle una interpretación liberal.¹¹

9. Cf. *Le syst. const.*, t. 1, N° 45, texto y nota 24.

10. Marshall, sin embargo, ha recogido un adagio del *common law* que influyó fuertemente en favor de interpretaciones literales, el adagio según el cual una disposición clara no requiere interpretación (cf. *infra*, N° 153). V. principalmente, *United States vs. Wiltberger* (1820), 5 Wh. 76, 95-96, 5 L. ed. 37. Pero él mismo no daba a este adagio sino una importancia razonable, situándolo, además, en el marco de un principio más amplio: "aunque el espíritu de un documento, y sobre todo de una Constitución, debe ser tan respetado como su letra, ese espíritu debe ser buscado esencialmente con la ayuda de las palabras empleadas". V. principalmente, *Sturges vs. Crownshield* (1819), 4 Wh. 122, 202, 3 L. ed. 526. Ningún jurista moderno rechazaría ese principio (cf. *infra*, N° 153, texto correspondiente a las notas 6 y 7).

11. Cf. *Le syst. const.*, t. 1, Núms. 94 y ss. Holmes, sin embargo, declaraba que el juez no tenía que preocuparse de la "intención" del legislador y que su misión era investigar lo que "las palabras" significaban: V. FRANKFURTER, *op. cit. supra*, N° 151, nota 2, at 538.

INTERPRETACION DE LA LEY

La fecha de 1937, por último, es la del famoso cambio de actitud de la Suprema Corte.¹² El jurista francés que lea en las sentencias dictadas por ese alto tribunal después de 1937 las interpretaciones que han sido dadas a leyes, sólo experimentará muy raras sorpresas, sea respecto a la solución alcanzada, sea en relación con los argumentos en que se apoya. Es cierto que muchas sentencias de la Corte, dictadas antes de esa fecha, le parecerán igualmente familiares; pero van acompañadas de otras sentencias un tanto sorprendentes, que ya no se encuentran después. Parece, además, como que la hostilidad de la Corte hacia un número bastante grande de leyes federales anteriores a 1937, hubiera dado ánimos a los tribunales de los Estados en su actitud tradicional de interpretación estricta, mientras que la actitud abierta de la Suprema Corte, desde 1937, ejerciera una influencia en sentido contrario. En la actualidad, aunque los tribunales estatales son requeridos mucho menos frecuentemente que los federales para resolver materias de derecho legislado, parecen suficientemente habituados a este derecho y suficientemente abiertos a su respecto, para dictar decisiones muy satisfactorias desde el punto de vista de un jurista continental.

Aún antes del cambio de la Suprema Corte de 1937, ya el legislador había tratado de reaccionar contra el trato de que era objeto su obra. Desde fines del siglo XIX, un número bastante grande de Constituciones o de Códigos insertaban una disposición rechazando la regla de *common law* según la cual las leyes que lo derogán deben ser interpretadas restrictivamente, y ordenaban a los tribunales que dieran a esas leyes una interpretación liberal, con la finalidad de promover sus objetivos y de ayudar a los particulares a obtener justicia. Y disposiciones parecidas se encuentran en leyes particulares, federales o de Estado. Estas disposiciones, evidentemente, han ayudado, en general, a extender una actitud más liberal respecto a las leyes, aunque algunos tribunales casi no las hayan tomado en cuenta.¹³

12. Cf. *Le syst. const.*, t. 1, N° 123.

13. Sobre la variable actitud de los tribunales respecto a esas disposiciones, v. SUTHERLAND, t. 3, § 6205, pp. 177-180. V. también WARREN A. SEAVEY, "*Liberal Construction and the Tort Liability of the Federal Government*", *Harv. L. R.* (1954), vol. 67, pp. 994-1003. Es interesante señalar que el proyecto de *Uniform Commercial Code* (cf. *infra*, N° 171), contenía, en su versión de 1950, no sólo una disposición que se encuentra en la mayor parte de las leyes uniformes y que establecía: Section 1-102 (1) "*This Act is remedial and shall be liberally construed and applied to promote its underlying reason, purposes and policies. One of the main purposes is to make uniform the law among the various jurisdictions*"; sino también un párrafo demandando francamente una aplicación por analogía de la ley: Section 1-102 (3) "*A provision of this Act which is stated to be applicable 'between merchants' or otherwise to be of limited application need not be so limited when the circumstances and underlying reasons justify extending its application*". Esta última disposición ha desaparecido en la versión de 1951. La section 1-102 (1) está redactada de esta manera: "*This Act shall be liberally construed and applied to promote its underlying purposes and policies*", y la

153.—Si bien, en la actualidad, la interpretación de las leyes parece asegurada de una manera satisfactoria, la verdad es que la tradición antigua ha dejado en la técnica de la interpretación huellas bastante profundas.¹

Es incuestionable, en primer lugar, que la misma atención prestada a la técnica de la interpretación de las leyes, así como la multitud de adagios que existen sobre esta materia, son signos de que la maestría en este dominio es de adquisición reciente. La cultura, se ha dicho, es lo que queda cuando todo se ha olvidado. Muchos tribunales no han olvidado todavía que “lo que es claro no necesita interpretación”;^{1 bis} pero que, de otra parte, “lo que es absurdo o contrario al espíritu general de la ley no es claro”; y que, “debiendo ser la ley interpretada como un todo, dos disposiciones individualmente claras pueden prestarse a una mutua ambigüedad”;² no han olvidado tampoco que una disposición puede ser interpretada “con la ayuda de las soluciones admitidas *in pari materia*”, pero que “*expressio unius est exclusio alterius*”, a menos que las circunstancias demuestren, por el contrario, que se puede razonar por analogía.³ En manos de juristas torpes, esos adagios hacen que las discusiones sobre la interpretación de las leyes recuerden las querellas de la Sorbona, de Rabelais.⁴ De hecho, sin

section 1-102 (2) expresa los objetivos que la ley se propone alcanzar (v. también sect. 1-104 y 1-106, y TUNC, *op. cit. supra*, N° 146, nota 10, N° 5).

Esas disposiciones legislativas sobre la interpretación de las leyes, que revelan, en verdad, una técnica poco segura, son muy antiguas. La Carta de Maryland (1632) termina con una disposición XXII, exigiendo a los tribunales que den a esta Carta una interpretación favorable al Barón de Baltimore y a sus herederos. V. igualmente, la Novena Enmienda de la Constitución.

153.—

1. C. LANDIS, *op. cit. supra*, N° 145, nota 1.

1 bis. Cf. Unexcelled Chemical Corp. vs. United States (1953), 345 U. S. 59, y *supra*, N° 152, nota 10.

2. Cf. SUTHERLAND, t. 2, § 4701-4706, pp. 333-340.

3. Cf. Justice Rutledge in National Mutual Ins. Co. vs. Tidewater Transfer Co. (1949), 337 U. S. 582, 93 L. ed. 1556, 69 S. Ct. 1173.

4. A los adagios clásicos, tomados al *common law* y de carácter técnico, se agregan todos los adagios modernos desenvueltos por la Suprema Corte, y a veces de naturaleza política. Así, los adagios, según los cuales una ley debe, si es posible, ser interpretada de manera constitucional (cf. *Le syst. const.*, t. 2, N° 253), o un tratado, de tal suerte que no modifique el derecho de los Estados (cf. *supra*, N° 151, nota 3); los adagios según los cuales una legislación social (*welfare legislation*) debe gozar de una interpretación liberal: *Cos vs. Roth* (1955), 348 U. S. 207, y las excepciones aportadas a una legislación “humanitaria” (relativa a los salarios), deben interpretarse restrictivamente: Justice Murphy, en *Morris vs. McComb* (1947), 332 U. S. 422, 92 L. ed. 44, 68 S. Ct. 131; el adagio según el cual las patentes, por ser restricciones a la libertad económica, deben sufrir una interpretación restrictiva en cuanto a los derechos que comportan: *United States vs. Masonite Corp.* (1942), 316 U. S. 265, 86 L. ed. 1461, 62 S. Ct. 1070; etc.

embargo, el resultado obtenido es casi siempre satisfactorio. Todo adagio tiene otro contrario, al menos en las circunstancias del caso, y el dominio de la interpretación de las leyes es suficientemente grande para que el buen sentido triunfe.⁵

Quedan, por otra parte, algunos rastros de los principios de interpretación literal y restrictiva que prevalecieron durante mucho tiempo.

Se cita, por ejemplo, el adagio según el cual los tribunales deben aplicar pura y simplemente una disposición clara y no pueden encontrar materia de interpretación, aún cuando tuvieran la impresión de que la intención del legislador era diferente a la expresada finalmente en la norma.⁶ En verdad, no carece de razón este adagio, porque el abogado medio —si es que no el hombre de la calle— debe poder leer la ley y atribuirle un sentido, sin estar obligado a investigar en los trabajos preparatorios si la expresión del legislador no ha hecho traición a su pensamiento. Por otro lado, como se ha dicho, un adagio es atemperado por otros contrarios, de tal forma que, en general, puede decirse que la cuestión de saber si la ley es clara y, en caso afirmativo, lo que ella significa, es una cuestión que se resuelve felizmente con cierto arbitrio y casi siempre tras de indagar la intención del legislador.⁷ Sin embargo, hechas esas reservas, el adagio, o la tradición de interpretación literal con la cual se relaciona, parece conducir a los tribunales norteamericanos, en caso de conflicto entre la significación aparente de una disposición legal un poco oscura y la significación que quisieran atribuirle sus autores, a rechazar la intención del legislador en los casos en que los tribunales franceses le concederían probablemente más peso.⁸

Un adagio particularmente inexacto y que a veces conduce a resultados molestos es aquél, según el cual debe presumirse que ninguna frase ni ninguna palabra de la ley es inútil. Acontece, de hecho, que dos principios tengan un cierto ámbito común o que el legislador, después de haber establecido un principio bastante general, piense más tarde, tomando en cuenta una materia determinada, deber aplicarle dicho principio.

5. Cf. FRANKFURTER, *op. cit. supra*, N° 151, nota 2, pp. 544-549; FRIEDMANN, *op. cit. supra*, N° 151, nota 2; RAMOS, *op. cit. supra*, N° 152, nota 2, p. 348; SEAVEY, *op. cit. supra*, N° 152, nota 13, p. 997. Numerosas sentencias tienen, por otra parte, la sabiduría de reconocer que todas las reglas sirven algo. V. por ejemplo, *United States vs. American Trucking Ass.* (1940), 310 U. S. 534, 542-544, 84 L. ed. 1345, 60 S. Ct. 1059.

6. Cf. *supra*, nota 1.

7. Cf. Justice Holmes, en *Boston Sand and Gravel Co. vs. United States* (1928), 278 U. S. 41, 48, 73 L. ed. 170, 49 S. Ct. 52; Mr. Justice Frankfurter, en *United States vs. Monia et al.* (1943), 317 U. S. 424, 87 L. ed. 376, 63 S. Ct. 409; *Brannan vs. Stark* (1952), 342 U. S. 451, 465-466; Harry Willmer JONES, *The Plain Meaning Rule and Extrinsic Aids in the Interpretation of Federal Statutes*, "Wash. Un. L. Q." (1939), vol. 25, pp. 2-26.

8. V. sin embargo, rechazando el adagio, *United States vs. American Trucking Ass.* (1940), *cit. supra*, nota 5.

Las tendencias conservadoras en la interpretación de las leyes están marcadas igualmente por el lugar que conservan dos adagios: uno, todavía repetido con frecuencia, según el cual es necesario interpretar restrictivamente, si no las leyes en general, al menos las que deroguen el *common law* y restrinjan los derechos por él reconocidos; ⁹ el otro, conforme al cual es necesario atribuir a las palabras utilizadas por la ley la significación que posean en el *common law* o la interpretación que precedentemente hayan recibido. ¹⁰ Hay que señalar, todavía aquí, que ninguna de esas reglas es arbitraria, ni contraria a los hábitos franceses. La segunda parece una simple expresión del sentido común. ¹¹ La primera se justifica por la idea de que el *common law* es la fuente general del derecho, y la Corte de Casación francesa

9. Cf. *Jamison vs. Escarnacion* (1930), 281 U. S. 635, 640, 74 L. ed. 1082, 50 S. Ct. 440 y *Johnson vs. Southern Pac. Co.* (1904), 196 U. S. 1, 40 L. ed. 363, 25 S. Ct. 158, ambas reconociendo el principio, pero rechazando su aplicación al caso; *Russick vs. Hicks* (W. D. Mich. 1949), 85 F. Supp. 281; *Stephenson vs. Cavendish* (1950), 134 W. Va. 361, 59 SE (2d) 459, 19 ALR (2d) 720; *People vs. Daghita* (1949), 299 N. Y. 194, 86 NE (2d) 172, 10 ALR (2d) 1385; *Bloomfield vs. Brown* (1942), 67 R. I. 452, 25 A. (2d) 354, 141 ALR 170; *Helms vs. American Securities Co.* (1939), 216 Ind. 1, 22 NE (2d) 822; *Rosell Park Trust Co. vs. Ward Baking Co.* (1939), 67 Md. 139, 9 A. (2d) 228; *Null vs. Staiger* (1939), 333 Pa. 370, 4 A. (2d) 883; *United States Casualty Co. vs. Hyrne* (1937), 117 N. J. L. 547, 189 Atl. 645; *Hannabass vs. Ryan* (1935), 164 Va. 519, 180 S. E. 416; *Reeves and Co. vs. Russell* (1914), 28 N. D. 265, 148 NW 654. Cf. igualmente *Antonelli vs. Xenakis* (pa. 1949), 99 A. (2d) 102. *Contra*: *Re Taylor* (1941), 61 Nev. 68, 114 P. (2d) 1086, 135 ALR 580 (cuando una ley tiene por objeto la revisión de toda una materia, el *common law* anterior es derogado): *Teders vs. Rothermer* (1939), 204 Minn. 570, 286 NW 353 (particularmente explícita).

Esta regla es a veces dulcificada y se encuentra bajo forma de simples presunciones. Así, se debe presumir el mantenimiento en vigor del *common law*, no admitir su abrogación implícita, sino considerarlo abrogado sólo en virtud de disposiciones claras y desprovistas de ambigüedad: *Lorenz vs. Campbell* (1939), 110 Vt. 200, 3 A. (2d) 548; *Coakley vs. Tidewater Const. Corp.* (1940), 194 S. C. 284, 9 SE (2d) 724. En otra forma: en caso de duda sobre el alcance de una ley, se debe presumir que el legislador no tenía intención de modificar el *common law*: *Bloomfield vs. Brown* (1942) cit. *supra*. Esta última presunción, en sí misma, está a veces desprovista de todo efecto restrictivo y se refiere simplemente a reglas tales como las que aconsejan pensar que el legislador, empleando una palabra que tiene un sentido definido en el *common law*, o que ha sido definida por las decisiones judiciales, ha querido tomarla en ese sentido técnico (cf. *infra*, N° 155).

Para un estudio más completo del adagio, de su alcance actual y de su valor, v. SUTHERLAND, t. 3, § 6201-6206, pp. 164-182; Jefferson B. FORDHAM and J. Russell LEACH, *Interpretation of Statutes in Derogation of the Common Law*, "Vand. L. R." (1950), vol. 3, pp. 438-455.

10. Cf. *infra*, N° 155.

11. Algunas decisiones declaran por otra parte, más ampliamente, que una ley debe ser interpretada a la luz de todos los elementos anteriores: *common law*, sin duda, pero también leyes y decisiones judiciales. V. por ejemplo, *Bott vs. Southeastern Pipe Line Co.* (1940), 190 Ga. 689, 10 SE (2d) 375.

admite que las leyes de excepción debe ser interpretadas restrictivamente. Sin embargo, su frecuente repetición es a la vez testimonio y causa del matiz de conservadurismo que marca la interpretación de las leyes en los Estados Unidos, matiz un poco lamentable, puesto que el derecho legislado es el medio por el cual pueden expresarse las ideas jurídicas nuevas.¹²

Una última huella de la actitud tradicional y, por qué no decirlo, una supervivencia de la condición inferior en la que durante mucho tiempo se ha tenido a la ley, consiste en la idea de que la ley nada significa mientras que no ha sido interpretada. Es, en efecto, una idea expresada con mucha frecuencia, al menos verbalmente, tanto por los teóricos como por los prácticos, la de que es imposible, por un lado, aplicar una ley sin interpretarla¹³ y, por otro, decir por la simple lectura de la ley la interpretación que recibirá. Esta idea supone, evidentemente, que la ley es necesariamente oscura y vaga —lo que es tanto más inexacto cuanto que la redacción de las leyes norteamericanas es extrarodinariamente minuciosa— y deriva de la experiencia de una época en que los tribunales se entregaban, de muy buen grado, a la interpretación de las leyes. No posee, pues, en la actualidad, ninguna razón de ser general, cuando la gran mayoría de las disposiciones son claras, respetadas y aplicadas sin dificultad. No obstante sigue bastante viva como para que los tribunales federales no sólo se nieguen a declarar la inconstitucionalidad de una ley de un Estado antes de que una interpretación judicial les haya proporcionado plena certeza sobre su significación y alcance,¹⁴ sino que hayan dudado, a veces, en aplicar simplemente una ley estatal antes de que haya sido interpretada, aun cuando sea de una claridad perfecta.¹⁵ Aún reconociendo el le-

12. Cf. FORDHAM and LEACH, *op. cit. supra*, nota 9.

13. V. una discusión de esta idea, en Frederick J. DE SLOOVERE, *Judge and Jury in Statutory Interpretation*, "Harv. L. R." (1933), vol. 46, pp. 1086-1110, 1095-1101. Es con esta idea con la que, al parecer, puede relacionarse la idea recíproca según la cual la interpretación de ley constiuye "una parte" de la ley: Cf. Douglass vs. County of Pike (1880), *cit. supra*, N° 81, nota 8; Carroll vs. Carroll (1853), 16 How. 275, 14 L. ed. 936; Shelby vs. Guy (1826), 11 Wh. 361, 4 L. ed. 495; New England Mutual Life Ins. Co. vs. Mitchell (4th. Cir. 1941), 118 F. (2d) 414; Buradus vs. General Cement Products Co. (1947), 356 Pa. 349, 52 A. (2d) 205; Philadelphia vs. Shaller (1942), 148 Pa. Sup. Ct. 276, 25 A (2d) 406; People vs. Graves (1934), 242 App. Div. 128, 273 N. Y. S. 582, reiterada en 270 N. Y. 498, 200 NE 288 (1936); Eau Claire National Bank vs. Benson (1900), 106 Wisc. 624, 82 NW 604; Lane vs. Watson (1889), 51 N. J. L. 186, 17 A. 117; cf. igualmente *supra*, N° 81, notas 8 y 10. Un gran número de esas sentencias, en verdad, no tienen otra finalidad que imponer a un tribunal federal o de Estado, que debe aplicar las leyes de un Estado, la obligación de sujetarse a la interpretación que le ha sido dada.

14. Cf. *Le syst. const.*, t. 2, N° 251, notas 7 y 12. Cf. igualmente, N° 256, texto y nota 6.

15. Cf. *supra*, N° 42. V. principalmente, Spanel vs. Pegler (7th. Cir. 1947), 160 F. (2d) 619, 171 ALR 699. Cf. Usattore vs. The Victoria (2d) Cir.

gítimo cuidado de los tribunales federales por respetar la competencia de los tribunales estatales, su reserva puede parecer muy exagerada, tanto más cuanto que en presencia de decisiones judiciales de los Estados, insuficientes o vagas y mucho menos susceptibles de aplicación directa que una ley clara, se han considerado obligados a resolver a cualquier costo.¹⁶ Independientemente, además, de toda consideración constitucional, es un hecho que se ve raramente, el de una sentencia que resuelva, pura y simplemente, por aplicación de una ley, ni siquiera en materia exclusivamente legislativa: el tribunal no se siente a gusto más que en la medida en que los precedentes que cita han comprometido de la misma manera que él la disposición que le interesa.¹⁷

154.—Para que el intérprete pueda conceder a las leyes una interpretación “liberal” y promover la intención de sus redactores, parece necesario que pueda acudir a los trabajos preparatorios, para tratar de encontrar un elemento de decisión.¹

1949, 172 F. (2d) 434; *Southwestern Greyhound Lines vs. Railroad Commission of Texas* (1936), 128 Tex. 560, 99 SW (2d) 263, 109 ALR 1235.

16. Cf. *supra*, N° 56.

17. Que la ley sigue siendo interpretada de una manera más rígida que en Francia y con cierta torpeza, está atestiguado por el hecho de haberse propuesto a menudo una enmienda constitucional, según la cual la mujer gozaría de los mismos derechos civiles y políticos que el hombre; pero siempre se ha retrocedido ante las consecuencias que los tribunales podrían extraer de semejante enmienda. Se considera, en efecto, que haría dudosa la validez de las leyes que establecen una edad mínima distinta del hombre y la mujer para el matrimonio (leyes que probablemente seguirían siendo válidas, porque la mujer tiene ya, en realidad, el “derecho” al matrimonio antes que el hombre); que anularía quizá las leyes que protegen de manera especial el trabajo de la mujer o de la mujer embarazada o la seducción o engaño de la menor; e incluso, que sus repercusiones sobre las indemnizaciones y vacaciones de maternidad, o sobre la existencia del delito de violación, serían problemáticas.

154.—

1. Sobre el empleo de los trabajos preparatorios, v. SUTHERLAND, t. 2, § 5001-5016, pp. 481-407; y los autores citados *supra*, N° 151, nota 2. *Adde*: *A Re-Evaluation of the Use of Legislative History in the Federal Courts*, nota en “Col. L. R.” (1952, vol. 52, pp. 125-1234; John W. MACDONALD, *The position of Statutory Construction in Present Day Law Practice*, “Vand. L. R.” (1950), vol. 3, pp. 369-381; Glendon M. FISCHER, Jr. and William J. HARBISON, *Trends in the Use of Extrinsic Aids in Statutory Interpretation*, nota en “Vand. L. R.” (1950), vol. 3, pp. 586-596; Robert K. EMERSON and Frank L. FULLER III, *How to Find and Use Federal Legislative Materials*, “West Virg. L. Q.” (1949), vol. 51, pp. 169-185; *Resort to constitutional or legislative debates, committee reports, journal, etc., as aid in construction of constitution or statute*, nota en ALR (1931), vol. 70, pp. 5-46.

Desde luego, el empleo de los trabajos preparatorios no conduce indefectiblemente a una interpretación extensiva, de la misma manera que el esfuerzo realizado para liberar a la ley de las reglas de interpretación restrictiva, no significa que la interpretación extensiva sea más deseable. Los trabajos prepa-

INTERPRETACION DE LA LEY

Como es sabido, el juez inglés tiene prohibido el consultar los trabajos preparatorios y les niega cualquier clase de valor. Considera igualmente imposible, en un sistema bicameral, presumir que los trabajos preparatorios de un proyecto de ley en una asamblea han sido enteramente conocidos por la otra y por el soberano, cosa que le parece indispensable para que puedan adquirir autoridad jurídica.²

En los Estados Unidos se puede decir que, actualmente, cuando surge alguna duda sobre la significación de una disposición legal, el intérprete se refiere a los trabajos preparatorios, si han sido publicados, o, más ampliamente a veces, a la historia de la disposición.³ La única

ratorios revelan a veces que una disposición legal debe subordinarse a una condición que no está escrita. Cf. Richardson vs. United States (1949), 114 Ct. Claims 695.

Respecto al empleo de los trabajos preparatorios en Francia, v. el interesante testimonio (que por supuesto no compromete al autor) de M. Paul LERBOURS-PIGEONNIÈRE, en "*Travaux de L'Association Henri Capitant 1949*", t. 5, 1950, p. 76.

2. Sobre la negativa del juez inglés a examinar los trabajos preparatorios, v. Millar vs. Taylor (1769) 4 Burr. 2303 at 2332; DAVID, *Introduction*, citada, pp. 104 y 107; Henry CAPITANT, *L'interprétation des lois d'après les travaux préparatoires*, D. H. 1935, Chr. p. 77. Así como *Les travaux préparatoires et l'interprétation des lois, Recueil d'études sur les sources du droit en l'honneur de François Géný*, 3 vols. 1934, t. 2, pp. 204-216; GUTTERIDGE, pp. 105-109, o traducción francesa, pp. 139-144 (trad. española, pp. 164-170); ALLEN, pp. 467-471; FRIEDMANN, pp. 311 y 374, nota 45, Cf. *infra*, texto y notas 12 y 13.

3. La importancia actual de los trabajos preparatorios es tal que se ve al Justice Black, en Adamson vs. California (1947), 332 U. S. 46, 91 L. ed. 1903, 67 S. Ct. 1672, 171 ALR 1223, anexas como apéndice a su *dissent* un estudio de la historia de la décimocuarta Enmienda, y la doctrina prosigue la discusión sobre ese terreno: Charles FAIRMAN, *Does the Fourteenth Amendment Incorporate the Bill of Rights? The Original Understanding*, "Stanford L. R." (1949), vol. 22, pp. 5-139. Tal ejemplo está lejos de ser único. Se ha visto igualmente a la Suprema Corte ordenar la reapertura de los debates en un asunto particularmente grave para que los abogados pudiesen dar luz sobre las circunstancias que rodearon la adopción de una enmienda constitucional: v. Brown vs. Board of Education (1954), 347 U. S. 483, 489, y André TUNC, *L'abolition par la Cour Suprême des Etats-Unis de la ségrégation raciale dans l'enseignement public*, "Rev. int. dr. comp.", 1955, pp. 816 y ss. Como ejemplos recientes de utilización de la historia y de los trabajos preparatorios por la Suprema Corte, v. principalmente Universal Camera Corp. vs. N. L. R. B. (1951), 340 U. S. 474, 477-487; Bindezyck vs. Finucane (1951), 342 U. S. 76, 79-88; United States vs. Hayman (1952), 342 U. S. 205, 210-219; Pope vs. Atlantic Coast Line R. Co. (1953), 345 U. S. 379, 384-387; Tinder vs. United States (1953), 345 U. S. 441; United States vs. Binghamton Construction Co. (1954), 347 U. S. 171; Phillips Petroleum vs. Wisconsin (1954), 347 U. S. 672; United States vs. Koppers Co. (1955), 348 U. S. 254; United States vs. Bramblett (1955), 348 U. S. 503. V. también, Youngstown Sheet and Tube Co. et al. vs. Sawyer (1952), 343 U. S. 579, donde la Corte tiene en cuenta la negativa del Congreso a votar algunas disposiciones, y André TUNC, *op. cit. supra*, N° 152, nota 5, p. 749.

Se sabe también que un estudio histórico de la *Judiciary Act* de 1789 ha influido fuertemente en pro del famoso cambio de la jurisprudencia llevado a

regla que parece prohibir en ciertos casos esta manera de proceder, es aquella según la cual lo que es claro no necesita interpretación; pero ya sabemos que tal regla es mucho menos rigurosa de lo que parece.⁴ Habiéndose esfumado la influencia de Marshall y de Story sobre este punto,⁵ parece que, en el período moderno, ha sido Holmes quien ha habituado más a la Suprema Corte a tener en cuenta los trabajos preparatorios. Mr. Justice Frankfurter recuerda⁶ que cuando Holmes llegó a la Suprema Corte, en 1902, los *United States Reports* no contenían casi ninguna referencia a aquéllos.

Estos trabajos preparatorios consultados para la interpretación de las leyes, no son, por otra parte, principalmente, los debates parlamentarios. En los Estados Unidos, todavía más, quizá, que en Francia, los trabajos de las comisiones son normalmente los únicos verdaderamente importantes. Mr. Justice Frankfurter considera que el 95% de la legislación pasa al Congreso en la forma adquirida en las Comisiones.⁷ El estudio de los trabajos preparatorios de una ley, por consiguiente, recae en principio sobre el informe de la Comisión,⁸ y a veces también, al menos cuando han sido registradas,⁹ sobre las de-

efecto por *Erie Railroad vs. Tompkins* (cf. supra, N° 55). En forma más general, los estudios relativos a la historia de una ley o de una enmienda constitucional se publican con bastante frecuencia, sea en forma de artículos (v. por ejemplo, W. Barton LEACH, *Perpetuities Legislation, Massachusetts Style*, "Harv. L. R." (1954), vol. 67, pp. 1349-1366, sea al menos en materia fiscal, en forma de libros (v. SEIDMAN, *Legislative History of Federal Income Tax Laws, 1861-1938* (1938), o *Legislative History of Excess Profits Tax Laws, 1946-1947* (1947); WOLKIN and MANOFF, *Revenue Act of 1948, Legislative History Series* (1948). Le U. S. Code Congressional and Administrative News (cf. *infra*, N° 229), reproduce, junto con el texto de todas las leyes de interés público, el de los informes al Congreso que las han acompañado.

V. por el contrario, contra la utilización de los trabajos preparatorios, las protestas del Justice Jackson y, en cierta medida, del Justice Frankfurter, en *United States vs. Public Utilities Commission* (1953), 345 U. S. 295, 319, 321.

4. Cf. *supra*, N° 153.

5. Cf. *supra*, N° 152.

6. Cf. *Op. cit. supra*, N° 151, nota 2, pp. 542-543.

7. *Op. cit.*, p. 545.

8. Cf. *Holy Trinity Church vs. United States* (1892), 143 U. S. 457, 36 L. ed. 226, 12 S. Ct. 511; *Binns vs. United States* (1904), 194 U. S. 486, 48 L. ed. 1087, 24 S. Ct. 816; *United States vs. St. Paul M. & M. Ry.* (1918), 247 U. S. 310, 62, L. ed. 349, 41 S. Ct. 172, 16 ALR 196; *Humphrey's Executor vs. United States* (1935), 295 U. S. 602, 79 L. ed. 1611, 55 S. Ct. 869; *Milk Wagon Drivers Union vs. Meadowmoor Dairies* (1941), 312 U. S. 287, 85 L. ed. 836, 61 S. Ct. 552, 132 ALR 1200; *Universal Camera Corp. vs. N. L. R. B.* (1951), *United States vs. Hayman* (1952), y *United States vs. Five Gambling Devices* (1953), citadas *supra*, nota 3; *Richardson vs. United States* (Ct. Claims 1949), *cit. supra*, nota 1; *Lavin vs. Lavin* (2nd. Cir. 1950), 182 F. (2d) 870.

9. Lo que sólo tiene lugar ante el Congreso y ante muy raras Legislatu-
ras estatales.

claraciones (*hearings*) prestadas ante la Comisión,¹⁰ aunque esas declaraciones sean ya mucho más contradictorias y engañosas.

El recurso a los debates ante las Cámaras ha sido mucho más difícilmente aceptado.¹¹ La razón estriba en que esos debates no siempre presentan una visión exacta de los problemas y opiniones; en que las necesidades políticas conducen frecuentemente a los miembros del Congreso a hablar contra su verdadera intención; y en que, de todas formas, los debates "expresan los puntos de vista y las razones de los miembros individuales, pero no son una guía segura y no pueden, en consecuencia, ser invocados para determinar el sentido y la intención del cuerpo legislativo como tal".¹² Sin embargo, se considera actualmente que si bien esas observaciones deben conducir a conceder menos peso a tal o cual pasaje de los debates, no justifican que se rechacen los debates en conjunto.¹³ Estos se han utilizado primeramente para indagar la finalidad de la ley y los males a los que debía poner remedio.¹⁴ Después se ha admitido que, para interpretaciones más pre-

10. Cf. *Staffort vs. Wallace* (1922), 258 U. S. 495, 66 L. ed. 735, 42 S. Ct. 397; *O'Hara vs. Luckenbach S. S. Co.* (1926), 269 U. S. 364, 70 L. ed. 313, 46 S. Ct. 157; *United States vs. Missouri Pac. R. R.* (1929), 278 U. S. 269, 73 L. ed. 322, 49 S. Ct. 133. *Contra*: *Mutual Ben. Life Ins. Co. vs. Duffy* (D. N. J. 1924), 295 F. 881; *Litchfield vs. Bridgeport* (1905), 103 Conn. 565, 131 Atl. 560; *Hartford vs. Connecticut Co.* (1928), 107 Conn. 312, 140, Atl. 734.

11. Cf. *Note on Legislative Materials to Aid Statutory Interpretation*, "Harv. L. R." (1937), vol. 50, nota, pp. 822-826, y las referencias proporcionadas, en particular: *Aldridge vs. Williams* (1845), 3 How. 9, 11 L. ed. 469; *United States vs. Trans-Missouri Freight Ass.* (1897), 166 U. S. 290, 41 L. ed. 1007, 17 S. Ct. 540; *Lapina vs. Williams* (1914), 232 U. S. 78, 58 L. ed. 515, 34 S. Ct. 196; *McCaughn vs. Hershey Chocolate Co.* (1931), 283 U. S. 488, 75 L. ed. 1183, 51 S. Ct. 510; *Matter of Morse* (1928), 247 N. Y. 290, 160 NE 374.

12. *Justice Pitney* en *Duplex Printing Press Co. vs. Deering* (1921), 254 U. S. 443, 474, 65 L. ed. 349, 41 S. Ct. 172. Cf. *United States vs. Trans-Missouri Freight Ass.* (1897), cit. en la nota precedente, at 318: "lo que surge con certeza de los debates y de los informes, es que los distintos miembros tenían opiniones diferentes... es imposible determinar con exactitud la interpretación que un cuerpo legislativo ha querido dar a un acto, por los discursos de sus miembros individuales. Quienes no han hablado han podido estar en desacuerdo con los que hablaron, y éstos pueden haber diferido unos de otros". Cf. también, *Justice Taney* en *Aldridge vs. Williams* (1845), cit. *supra*, nota 11: "La ley, tal como ha sido votada, es el resultado de la voluntad de la mayoría en las dos Cámaras y la única expresión de esta voluntad es el propio acto", y *Mr. Justice Jackson*, *loc. cit. supra*, nota 3.

13. La escasa utilidad del estudio de los debates del Congreso es puesta de relieve, en verdad, por la sentencia *United States vs. United Mine Workers of America* (1947), 330 U. S. 258, 91 L. ed. 884, 67 S. Ct. 677, donde el Chief Justice Vinson reenvía catorce veces al *Congressional Record* y Mr. Justice Frankfurter, en desacuerdo con él, hace lo propio en veintiuna ocasiones. V. igualmente, *United States vs. Five Gambling Devices* (1953), 346 U. S. 441.

14. Cf. los célebres *Legal Tender Cases* (1884), 110 U. S. 421, 28 L. ed. 204, 4 S. Ct. 112, y, sobre todo, *Pollock vs. Famer's Loan and Trust Co.*

cisas, podían utilizarse las declaraciones de los presidentes de las asambleas y las del responsable del proyecto de ley.¹⁵ Finalmente, los propios debates son utilizados hoy, casi sin restricción, tanto por los tribunales federales como por los de los Estados, y han adquirido un peso decisivo cuando revelan el acuerdo de los miembros de las Cámaras sobre la interpretación de una disposición ambigua.¹⁶

Se ha planteado también la cuestión de saber si resulta posible utilizar para la interpretación de una ley la opinión de agrupaciones o personas que hayan contribuido a su elaboración, pero que no pertenezcan al cuerpo legislativo, tales como los órganos administrativos o los *lobbyist*,¹⁷ que pueden haber tomado la iniciativa y presentado un informe sobre la materia.¹⁸ En general, los tribunales tienen bastante en cuenta la interpretación contemporánea dada a la ley por los organismos oficiales: comité de revisión¹⁹ o de investigación, *Commissioners on Uniform State Laws*²⁰ e incluso de la Administración, sobre

(1895), 157 U. S. 429, 39 L. ed. 759, 15 S. Ct. 673. V. también, más recientemente, *Federal Trade Commission vs. Raladam Co.* (1931), 283 U. S. 643, 650, 75 L. ed. 1324, 51 S. Ct. 587; *Universal Camera Corp. vs. N. L. R. B.* (1951), y *Bindczyck vs. Finucane*, at 83-84, citadas *supra*, nota 3.

15. *Duplex Printing Press Co. vs. Deering* (1921), cit. *supra*, nota 12; *United States vs. San Francisco* (1940), 310 U. S. 16, 22, 84 L. ed. 1050, 60 S. Ct. 749; *Shapiro vs. United States* (1948), 335 U. S. 1, 92 L. ed. 1787, S. Ct. 1375; *Bindczyck vs. Finucane* (1951), at 83, cit. *supra*, nota 3; *United States vs. Five Gambling Deviser* (1953), cit. *supra*, nota 3; *United Electric Coal Companies vs. Rice* (7th. Cir. 1935), 80 F. (2d) 18; *Alton R. R. vs. Railroad Retirement Board* (D. C. 1936) 16 F. Supp. 955; *North Carolina Corporation Commission vs. Sothern Railway* (1923), 185 N. C. 435, 117 S. E. 563. Cf. también *Jennison vs. Kirk* (1878), 98 U. S. 453, 25 L. ed. 240.

16. Cf. *Federal Trade Commission vs. Raladam* (1931), cit. *supra*, nota 14; *United States vs. Shreveport Grain and Elevator Co.* (1932), 287 U. S. 77, 77 L. ed. 175, 53 S. Ct. 42; *Norwegian Nitrogen Products Co. vs. United States* (1933), 288 U. S. 294, 305, 97 L. ed. 796, 53 S. Ct. 350 ("Ninguna parte, durante el curso de los largos debates que se han sucedido, ha sugerido más que..."); *United States vs. San Francisco* (1940), 310 U. S. 554, 560, 84 L. ed. 1356, 60 S. Ct. 1034; *Universal Camera Corp. vs. N. L. R. B.* (1951), y *Bindczyck vs. Finucane* (1951), at 83-84, citadas *supra*, nota 3. V. en contra, *MacCaughn vs. Hershey Chocolate Co.* (1931), cit. *supra*, nota 11, at 493.

Es, por el contrario, imposible, apoyarse en los debates cuando ellos no han sido decisivos. Cf. *Pine Hill Coal vs. United States* (1922), 259 U. S. 191, 196, 66 L. ed. 894, 42 S. Ct. 582; *Brannan vs. Stark* (1952), 342 U. S. 451, 465-466.

17. Cf. *Le syst. const.*, t. 2, N° 167.

18. Cf. *Non Legislative Intent as an Aid to Statutory Interpretation*, "Col. L. R." (1949), vol. 49, nota, pp. 676-685.

19. Cf. *United States vs. Hayman* (1952), *Pope vs. Atlantic Coast Line R. Co.* (1953), *Tinder vs. United States* (1953), citadas *supra*, nota 3; *Lavin vs. Lavin* (2nd. Cir. 1950), cit. *supra*, nota 8.

20. Cf. *infra*, N° 171. En el proyecto de *Uniform Commercial Code* de 1951 (cf. *infra*, N° 171), una disposición (section 1-102 (3) g) prohíbe que los proyectos y comentarios anteriores sean consultados para determinar la in-

todo si el proyecto emana de ella.²¹ En principio, rechazan, por el contrario, la opinión de los *lobbyists*. En particular, la Suprema Corte se niega a tener en cuenta, no sólo los informes officiosos de ellos o las declaraciones officiosas que puedan haber hecho, sino sus declaraciones ante las comisiones del Congreso,²² a no ser para precisar los ma-

tención del legislador (lo que revela hasta qué punto es normal en el intérprete el buscar esa intención); por el contrario, cada disposición va acompañada de comentarios redactados por los propios autores del Código, comentarios que se benefician de la disposición siguiente (Section 1-102 (3) f): "*The Official Comments of the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws and the American Law Institute may be consulted in the construction and application of this Act but where text and comment conflict, text controls*". (Cf. TUNC, *op. cit. supra*, N° 146, nota 10, N° 8).

21. La Suprema Corte afirma frecuentemente que debe reconocerse una gran autoridad a la "*practical construction*" o "*administrative construction*", es decir, a la interpretación dada a la ley por los interesados, principalmente por la Administración, sin que ni siquiera limite el dominio de esta regla al caso en que la Administración haya sido la promotora de la ley. La regla en cuestión tiende realmente a lograr para la ley el alcance previsto por el legislador, e incluso un ámbito más extenso. Los interesados saben, en efecto, lo que quería el legislador, y tienden a hacer prevalecer su conocimiento sobre el texto de la ley; en el caso en que la ley interese a la Administración, es ella también, generalmente, la promotora de la misma; finalmente, si la ley concede poderes a la Administración o a una comisión, esos poderes serán casi siempre interpretados extensivamente.

Sobre la regla que comentamos, v. Edward's Lessee vs. Darby (1827), 12 Wh. 206, 210, 6 L. ed. 603. ("en caso de ley ambigua, la interpretación contemporánea de quienes han tenido que vivir bajo su imperio y que han sido designados para aplicarla tiene derecho al mayor respeto"; Decatur vs. Pauling (1840), 14 Pet. 497, 10 L. ed. 610; United States vs. Midwest Oil Co. (1915), 236 U. S. 459, 59 L. ed. 673, 35 S. Ct. 309; Okanogan Indians vs. United States (1920), 279 U. S. 655, 73 L. ed. 894, 49 S. Ct. 463, 64 ALR 1434; Hampton, Jr. and Co. vs. United States (1928), 276 U. S. 394, 72 L. ed. 624, 48 S. Ct. 348; McCaughn vs. Hershey Chocolate Co. (1931), *cit. supra*, nota 11; United States vs. American Trucking Ass. (1940), 310 U. S. 534, 84 L. ed. 1345, 60 S. Ct. 1059; Helvering vs. Griffiths (1943), 318 U. S. 371, 87 L. ed. 834, 63 S. Ct. 636; Billings vs. Truesdell (1944), 321 U. S. 542, 88 L. ed. 917, 64 S. Ct. 737; Skidmore vs. Smith and Co. (1944), 323 U. S. 134, 89 L. ed. 65 S. Ct. 161; Foley Bros. Inc. vs. Filardo (1949), 326 U. S. 281; Youngstown Sheet and Tube Co. vs. Sawyer (1952), *cit. supra*, N° 152, nota 5; United States vs. Koppers (1955), 348 U. S. 254; notas 73 L. ed. 361 y 84 L. ed. 59, 74; Lavin vs. Lavin (2d. Cir. 1950), *cit. supra*, nota 8; West Texas Utilities Co. Inc. vs. N. L. R. B. (D. C. Cir. 1950), 184, F. (2d) 233; People ex rel. Park Reservoir Co. vs. Hinderlider (1936), 98 Colo. 505, 57 P. (2d) 894; SUTHERLAND, t. 2, § 5101-5110, pp. 508-528; CORWIN, pp. 147-149. V. en contra, United States vs. Symonds (1887), 120 U. S. 46, 30 L. ed. 557, 7 S. Ct. 411; Joint Anti-Fascist Refugee Committee vs. McGrath (1951), 341 U. S. 123, 137-138.

22. Cf. McCaughn vs. Hershey Chocolate Co. (1931), *cit. supra*, nota 11, at 493. V. sin embargo, O'Hara vs. Luchenback Steamship Co. (1926), *cit. supra*, nota 10, at 367, y Holy Trinity Church vs. United States (1892), *cit. supra*, nota 8, at 464.

les a los que la ley debe poner remedio. Algunos tribunales inferiores son, sin embargo, más liberales: han utilizado la interpretación dada por los *lobbyists* a una frase empleada por los legisladores, o sus declaraciones en cuanto al objeto de una disposición legal.²³

155.—Se aprecia, pues, que la actitud del jurista norteamericano respecto a la ley, no difiere mucho, en la actualidad, de la del jurista continental. La ley se haya liberada ampliamente de la condición, en cierta forma inferior, en que la había mantenido el *common law*. Sigue siendo cierto, sin embargo, que no se aplica sino en el marco del *common law*, y ese hecho implica múltiples consecuencias, que nos gustaría evocar a guisa de conclusión.¹

Conviene recordar, en primer término, el adagio clásico según el cual las leyes que derogan el *common law* deben interpretarse restrictivamente.²

23. *Smith vs. Gilliam* (W. D. Ky. 1922), 282 F. 628. *Contra*: *Mutual Ben. Life Ins. Co. vs. Duffy* (D. N. J. 1924), 295 F. 881.

Sobre el problema particular de la ley que, remitiéndose a una ley anterior, olvida una disposición, v. *Murdock vs. Memphis* (1875), 20 Wall. 590, y *Wood vs. Broom* (1932), 287 U. S. 1.

155.—

1. Cf. ERNST BRUNCKEN, *The Common Law and Statutes*, "Yale L. J." (1920), vol. 29, pp. 516-522; WARREN R. MACHEL, *The Role of the Common Law in Interpretation of Statutes in Missouri*, "Wash. Un. L. Q." (1952), vol. 1, pp. 101-116; SUTHERLAND, t. 3, § 5301-5305, pp. 1-17. Las leyes vigentes en un territorio antes de la introducción del *common law* y que se aplican en el marco de un sistema jurídico diferente (el sistema mexicano, por ejemplo), deben, por el contrario, continuar siendo interpretadas en el marco de ese sistema: *Miller vs. Letzerich* (1932), 121 Tex. 248, 49 SW (2d) 404, 85 ALR 451. Por otra parte, las decisiones modernas reconocen que la ley debe ser interpretada en el marco general del derecho en vigor, lo que comprende, no sólo el *common law* y la Constitución, sino las demás leyes vigentes y las decisiones judiciales pronunciadas sobre el particular: *Thorton vs. Anderson* (1951), 207 Ga. 714, 64 SE (2d) 186, 24 ALR (2d) 1079.

2. Cf. *supra*, N° 153. Recuérdese la tesis mucho más enérgica afirmada por Coke en el *Dr. Bonham's Case* (1810), 8 Co. Rep. 114, 118, según la cual la ley podía ser nula si desconocía los principios fundamentales del *common law*. Esta tesis había sido aplicada por el *Privy Council* a una ley de Connecticut, en 1727, en el asunto *Winthrop vs. Lechmere* Charles G. HAINES, *The American Doctrine of Judicial Supremacy* (1914, 2ª ed. 1932, p. 50) y había dejado huellas en los Estados Unidos (cf. *Le syst. const.*, t. 1, N° 45). Desde luego, ahora está completamente olvidada (v. solamente *Le syst. const.*, t. 1, N° 87. Se puede preguntar igualmente si la anulación pronunciada en *Willcox vs. Penn Mutual Life Ins. Co.* (1947), 357 Pa. 581, 55 A. (2d) 521, no se explica, en realidad por el hecho de que la ley modifica tan profundamente algunos principios anteriores del *common law* que le parece al juez vaga e inaplicable). Nótese, además, que la presunción que perdura hoy es anterior, en Inglaterra, al *Dr. Bonham's Case* (cf. SUTHERLAND, t. 3, § 6201, nota 3, p. 165. Sobre el *Dr. Bonham's Case*, v. Theodore F. T. PLUCKNETT, *Bonham's Case and Judicial Revision*,

Hay que señalar, igualmente, la regla conforme a la cual, puesto que sólo la existencia de una ley puede evitar la aplicación del *common law*, la derogación de la ley hace revivir al *common law* sobre la materia, mientras que la abrogación de una ley que derogaba a otra no hace, necesariamente, revivir a esta última.³

Por otra parte y fundamentalmente, los principios del *common law* y el estado de éste sobre una materia determinada, en el momento de la adopción de una ley, pueden, y frecuentemente deben, ser tomados en consideración para la interpretación de esa ley.⁴

Esta regla general adopta, en sí misma, dos aspectos particulares. Se ha señalado ya que las palabras y las expresiones que se utilizan por el legislador deben, en virtud de una regla secular, recibir la significación que posean en el *common law* en la materia, o, si hubieren sido empleadas en una ley precedente relativa al mismo particular, la significación resultante de la interpretación judicial de que hubieren sido objeto.⁵ Este adagio explica el gran número de leyes penales que,

"Harv. L. R." (1926), vol. 40, pp. 30-70; S. E. THORNE, *Dr. Bonham's Case*, "L. Q. R." (1938), vol. 54, pp. 543-552.

3. Esta última cuestión es objeto de decisiones contradictorias. V. principalmente, *In re Sloan's Estates* (1935), 7 Cal. App. (2d) 319, 46 P. (2d) 1007; *Stickler vs. Higgins* (1937), 269 Ky. 260, 106 SW (2d) 1008; *Reeves and Co. vs. Russell* (1914), 28 N. D. 265, 148 NW 654; *Baum vs. Thoms* (1898), 150 Ind. 378, 50 NE 357, 65 Am. St. Rep. 368; *Beavan vs. Went* (1895), 155 Ill. 592, 41 NE 91, 31 LRA 85; cf. *Barich* (1937), 201 Minn. 34, 275 NW 421. V. un estudio más completo de la cuestión en 82 C. J. S., *Statutes*, § 307.

4. *Grosjean vs. American Press Co.* (1936), 297 U. S. 233, 80 L. ed. 660, 56 S. Ct. 444; *Duplex Printing Press Co. vs. Deering* (1921), 254 U. S. 443, 65 L. ed. 349, 41 S. Ct. 172; *Standard Oil Co. vs. United States* (1911), 221 U. S. 1, 55 L. ed. 619, 31 S. Ct. 502; *Schick vs. United States* (1904), 195 U. S. 65, 49 L. ed. 99, 24 S. Ct. 826 y las referencias; *United States vs. Wong Kim Ark* (1898), 169 U. S. 649, 42 L. ed. 890, 18 S. Ct. 456; *United States vs. Sanges* (1892), 144 U. S. 310, 36 L. ed. 445, 12 S. Ct. 609; *United States vs. American Medical Ass.* (D. C. Cir. 1940), 110 F. (2d) 703; *Washington Loan and Trust Co. vs. Colby* (D. C. Cir. 1939), 108 F. (2d) 743; *In re Beyea's Estate* (Del. Orph. 1940), 15 A. (2d) 177; *Continental National Bank and Trust Co. vs. John H. Seely and Sons Co.* (1938), 94 Utah 357, 77 P. (2d) 355; *Palmer vs. Summer* (1935), 113 Me. 337, 177 A. 711, 97 ALR 1292; *Brammall vs. La Rose* (1953), 105 Vt. 345, 165 A. 916; *Bridgford vs. Groh* (1932), 306 Pa. 566, 160 A. 451; *Colorado State Board of Pharmacy vs. Hallett* (1931), 88 Col. 33, 296 P. 540; *National Fire Ins. Co. vs. Goggin* (1929), 267 Mss. 430, 166 NE 758. — Cf. *Psota vs. Long Island R. Co.* (1927) 246 N. Y. 388, 159 NE 180; *Jones vs. Dunkelberg* (1936), 221 Iowa 1031, 265, NW 157; *Botts vs. Southeastern Pipe line Co.* (1940), 190 Ga. 689, 10 SE (2d) 375.

5. *Shapiro vs. United States* (1948), 335 U. S. 1, 92 L. ed. 1787, 68 S. Ct. 1375; *Standard Oil Co. vs. United States* (1911), cit. *supra*, nota precedente; *McCool vs. Smith* (1861), 1 Black 459, 17 L. ed. 218; *State ex rel. Wyman vs. Turk* (1939), 62 Ohio App. 227, 23 NE (2d) 644; *Aberdeen Bindery vs. Eastern States Printing and Publ. Co.* (1938), 166 Misc. 904, 3 N. Y. Supp. (2d) 419; *Silver Falls Timber Co. vs. Eastern and Western Lumber Co.* (1935),

sin definir las infracciones, adoptan implícitamente los conceptos del *common law*. Puede tener por efecto extender⁶ o reducir,⁷ según los casos, el aparente alcance de la ley. Además, en caso de duda debe presumirse que la ley es compatible con el *common law* y que el legislador no ha pretendido derogarla.⁸ La fuerza de esta presunción, así como, en general, la importancia del *common law* como elemento de interpretación de la ley, aumentan, evidentemente, cuando la ley tenga por objeto consolidar o, en escala más amplia, codificar, el *common law*.⁹

Finalmente, hay que mencionar, en la medida en que el fenómeno es diferente al que acaba de ser descrito, una especie de colaboración de la ley y del *common law*, en forma de una aplicación sucesiva, a determinada situación jurídica, de los principios de la ley y, después, del *common law*. Una ley penal, por ejemplo, produce las consecuencias civiles que surgen de los principios del *common law*.¹⁰ El derecho de apelar puede ser admitido en caso de silencio del legislador.¹¹ De la misma manera, una ley que permite proceder contra una persona responsable de la muerte de un tercero, se ha considerado aplicable indirectamente al patrón de esa persona, en virtud de los principios de *common law* sobre responsabilidad del amo por hechos de su servidor;¹² ciertos actos que legalmente debían ser realizados por "el demandado" se han considerado realizables por su abogado, conforme a las

149 Ore. 126, 40 P. (2d) 703 (aplicación parcial de la regla); *Loudon vs. Loudon* (1933), 114 N. J. Eq. 242, 168 A. 840, 89 ALR 904; *Commonwealth vs. Welosky* (1931), 276 Mass. 398, 177 NE 656. Cf. igualmente, *Caroline Products Co. vs. United States* (1944), 323 U. S. 18, 89 L. ed. 15, 65 S. Ct. 1, 155 ALR 1371; *Jones vs. H. D. and I. K. Crosswell Inc.* (4th. Cir. 1932), 60 F. (2d) 827; *In re Beyea's Estate* (Del. Orph. 1940), 15 A. (2d) 177; y, desde un punto de vista especial, 146 ALR 923-925.

6. *State vs. Berry* (1939), 200 Wash. 495, 93 P. (2d) 782; *Hallen vs. Martin* (1918), 40 S. D. 343, 167 NW 314; *Territory vs. Cutinola* (1887), 4 N. M. 305, 14 P. 809. Cf. *Beales vs. Ares* (1919), 25 N. M. 459, 185 P. 780.

7. *Standard Oil Co. vs. United States* (1911), *United States vs. Sanges* (1892); *Palmer vs. Summer* (1935), citadas *supra*, nota 4; *Kearney vs. Vann* (1911), 154 N. C. 311, 70 SE 747.

8. Cf. *supra*, N° 153, nota 9.

9. *Cumberland Tel. and Tel. Co. vs. Kelly* (6th. Cir. 1908), 160 F. 316; *Ex parte Carlson* (1922), 176 Wis. 538, 186 NW 722; *Hallen vs. Martin* (1918), cit. *supra*, nota 6; *People vs. Miller* (1911), 143 App. Div. 251, 128 N. Y. Supp. 549, aff. 202 N. Y. 618, 96 NE 1125; *Peterson vs. Gittings* (1899), 107 Iowa 306, 77 NW 1056.

10. *Great Northern R. Co. Otos* (1915), 239 U. S. 349, 60 L. ed. 322, 36 S. Ct. 124; *Holmes vs. Merson* (1938), 285 Mich. 136, 280 NW 139; *Hoxsey vs. Baker* (1933), 216 Iowa 85, 246 NW 653; *Martin vs. Herzog* (1920), 228 N. Y. 164, 126 NE 814. V. incluso para una ley civil: *Braufman vs. Hart Publication* (1951), 234 Minn. 343, 48 NW (2d) 546, 25 ALR (2d) 1030.

11. *Bindczyk vs. Finucane* (1951), 342 U. S. 76, 87.

12. *Nolan vs. Moore* (1921), 81 Fla. 594, 88 So. 601; cf. *Meecks vs. Johnston* (1923), 85 Fla. 248, 95 So. 670.

INTERPRETACION DE LA LEY

reglas del *common law*.¹³ En este caso, como se puede apreciar, la regla juega en favor de una extensión de la aplicación de la ley; pero no siempre es así. Un asesino, llamado legalmente a suceder, ha sido en ocasiones rechazado de la sucesión, aunque la ley haya permanecido silenciosa sobre el particular, en virtud del principio del *common law* según el cual nadie puede aprovecharse de sus propias faltas;¹⁴ la exigencia de intención criminal, no considerada específicamente por la ley, ha sido requerida a veces en virtud de los principios del *common law*;¹⁵ y otros muchos ejemplos podrían exponerse.¹⁶

Tales son los principales aspectos de las relaciones entre la ley y el *common law*, sin que su rápida exposición trate de ser exhaustiva.¹⁷ A menudo se plantea, por ejemplo, la cuestión de saber qué derecho rige un problema que entra en el marco de la ley, sin estar expresamente previsto por ella, cuestión a la que, por lo demás, resulta imposible aportar una solución de principio.¹⁸ Desde este punto de vista, como en muchos otros, las relaciones de la ley y del *common law* evocan a veces las relaciones muy complejas, como se sabe, de la ley federal y de la de los Estados.¹⁹

13. *Brammall vs. La Rose* (1933), 105 Vt. 345, 165 A. 916.

14. *Garwols. vs. Bankers Trust Co.* (1930), 251 Mich. 420, 232 NW 239; *In re Tyler's Estate* (1926), 140 Wash. 619, 250 P. 456, 51 ALR 1088.

15. *Walter vs. Northern Ins. Co.* (1939), 370 Ill. 283, 18 NE (2d) 906. Cf. *United States vs. Kirby* (1868), 7 Wall. 432, 19 L. ed. 278. V. en contrario *United States vs. Balint* (1922), 258 U. S. 250, 66 L. ed. 604, 42 S. Ct. 301; *Reynolds vs. United States* (1878), 98 U. S. 145, 25 L. ed. 244.

16. V. por ejemplo *Ex parte Pittman Construction Co.* (1938), 28 Ala. App. 134, 180 So. 725.

17. Cf. en particular, SUTHERLAND, t. 3, § 5305, pp. 12-17.

18. Confróntese *Security First Nat. Bank vs. United States* (1939), 103 F. (2d) 188, *Prudential Insurance Co. vs. Bass* (1934), 357 Ill. 72, 191 NE 284 y *National City Bank vs. National Bank of Republic* (1921), 300 Ill. 103, 132 NE 832, 22 ALR 1153. Cf. *Olson vs. Chicago Great Western R. R.* (1935), 193 Minn. 533, 259 NW 70 y *Licha vs. Northern Pac. R. R.* (1937), 201 Minn. 427, 276 NW 813. Cf. también *Allen vs. Houn* (1923), 300 Wyo. 186, 219 P. 573.

Tampoco se ha sabido nunca si la *Trade Mark Act* de 1905 afectaba al fondo del derecho o si su alcance era puramente procesal. La confusión fue todavía aumentada por *Erie Railroad vs. Tompkins* (cf. *supra*, N° 57) y ha sido necesaria la *Trade Mark Act* de 1946 para ponerle fin. Cf. *Johnson and San, Inc. vs. Johnson* (2nd. Cir. 1949), 175 F. (2d) 176.

19. *Le syst. const.*, t. 2, N° 189.